



Roj: **STSJ CAT 326/2025 - ECLI:ES:TSJCAT:2025:326**

Id Cendoj: **08019339922025100001**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Barcelona**

Sección: **992**

Fecha: **27/01/2025**

Nº de Recurso: **1/2024**

Nº de Resolución: **238/2025**

Procedimiento: **Recurso de revisión**

Ponente: **MARIA ABELLEIRA RODRIGUEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Sección casación de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de Cataluña

Vía Laietana, 56, 4a planta - Barcelona - C.P.: 08003

TEL.: 933440005

FAX: 933440000

EMAIL: salacontenciosa.tsjcat@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801945320238001972

N.º Recurso de revisión de sentencias firmes - 1/2024-Y

Materia: Plus-Vàlua

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0763000000000124

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección casación de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de Cataluña

Concepto: 0763000000000124

Parte recurrente/Solicitante/Ejecutante: Miriam

Procurador/a: Noemi Xipell Lorca

Abogado/a: David Drago Corbella

Parte demandada/Ejecutado: Ajuntament de MONTCADA I REIXAC, Ministeri Fiscal

Procurador/a: Jaime Paloma Carretero

SENTENCIA N.º 238/2025

Presidente:

S. Javier Aguayo Mejía

Magistrados/Magistradas:

Sra. María Luisa Pérez Borrat

Sr. Pedro Luis García Muñoz Sra. Emilia Giménez Yuste Sra. Maria Abelleira Rodriguez

Barcelona, a fecha de la última firma electrónica.

VISTO POR LA SECCIÓN DE CASACIÓN DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso de **revisión de sentencia nº 1/2024**, interpuesto por

la Procuradora de los Tribunales D^a Noemí Xipell Lorca, en representación de D^a **Miriam**, defendido por el Abogado D. David Drago Corbella. Como parte demandada comparece el **Ayuntamiento de Montcada y Reixac** representado por el Procurador D. Jaume Paloma Carretero. Ha sido parte el **Ministerio Fiscal**.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO -La representación procesal de D^a Miriam interpone en fecha de 24 de mayo de 2024, ante esta Sala, recurso de revisión contra la sentencia firme núm. 14/2024, de 16 de enero de 2024, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Barcelona.

Tras determinar la acción que ejercita, y los "Hechos" que tiene a bien, pone de manifiesto en su escrito que cumple con los requisitos de competencia para el conocimiento de la revisión así como el relativo al depósito preceptivo y los del art. 512 LEC 1/2000 en cuanto al límite temporal de cinco años desde la publicación de la sentencia de instancia.

Sustenta su pretensión en que la sentencia de instancia firme debe revisarse por cuanto concurre el supuesto previsto en el art. 102. 1 a) LJCA, ya que se ha dictado la sentencia núm. 339/2024, de 28 de febrero, de la que adjunta copia. Que presentó la rectificación de autoliquidación en el plazo de 4 años - art. 66 LGT-. Que está legitimada activamente para solicitar la revisión de la sentencia por cuanto fue parte en el procedimiento ante la instancia.

Y, terminó su escrito solicitando: "*... dicte Sentencia el Tribunal rescindiendo la impugnada y actúe en las demás formas previstas en el art. 516 LEC* "

SEGUNDO -Tras la admisión de la demanda por diligencia de ordenación de 27 de junio de 2024 se reclamaron las actuaciones originales correspondientes al procedimiento abreviado núm. 102/2023, seguido en el Juzgado C-A núm. 1 de Barcelona, con emplazamiento de la demandada y otros interesados.

TERCERO.-Por parte de D. JAUME PALOMA CARRETERO, Procurador de los Tribunales y del **Ayuntamiento de Montcada y Reixac**, se presentó escrito de contestación a la demanda de revisión. Expuso los hechos que tuvo a bien y defendió que no procedía la revisión de la sentencia firme ya que la STS de 28 de febrero de 2024 no es aplicable al presente caso ya que se ha producido un incremento de valor que se ha puesto de manifiesto en la transmisión de los inmuebles -11 plazas de parking-. Suplica la desestimación de la pretensión de revisión, con imposición de costas a la parte demandante.

El **Ministerio Fiscal** informó que estamos ante un recurso extraordinario cuyos motivos o causas por las que puede interponerse el recurso de revisión se hallan expresamente tasados en los art. 102 LJCA y 510 LEC, no siendo el motivo invocado, art. 102.1 a) LJCA, el que procede en el caso. La sentencia del TS mencionada no tiene que ver con el caso. No hay negativa de la Administración local demandada a revisar una autoliquidación impositiva sino ante la actuación de una persona que reconociendo el incremento de valor de los terrenos (adquiridos en 1992) y posteriormente vendidos (en 2018), autoliquidó el impuesto por el incremento dado y posteriormente, en 2022, solicita la rectificación -sin base alguna- puesto que existió incremento de valor y así lo declaró. Que procede la desestimación.

CUARTO.-Constituido el Tribunal para la resolución del recurso de revisión, se señaló día para votación y fallo, que tuvo lugar en la fecha señalada.

Es Ponente la Magistrada de esta Sección especial, D^a **María Abelleira Rodríguez**, quien expresa el parecer de la misma, constituida al efecto.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-Se interpone recurso de revisión contra la sentencia de 16 de enero de 2024 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Barcelona, en tanto que desestima la pretensión actora de obtener la anulación de la desestimación por silencio del recurso de reposición interpuesto por la hoy parte actora el 27.1.2023 contra la desestimación presunta respecto de la solicitud de rectificación de las autoliquidaciones del IIVTNU y consiguiente devolución de ingresos indebidos.

En aquel caso la Administración se opuso por considerar que al amparo de la STC 182/2021, de 26 de octubre, concurría una situación consolidada, de conformidad con el apartado b) del FJ Sexto de la STC, por lo que no procedía la rectificación solicitada.

La sentencia de instancia desestima el recurso por considerar, en definitiva, atendiendo a las fechas que la solicitud de rectificación de autoliquidación lo fue con posterioridad a la STC 182/2021, de 26 de octubre. No consta que con anterioridad a esa fecha hubiera realizado solicitud alguna por lo que la situación no

era susceptible de ser revisada. Además, señala que la parte actora no desvirtúa el razonamiento de la Administración.

SEGUNDO. -La resolución del presente recurso de revisión aconseja que razonemos sobre dos distintas cuestiones:

En primer lugar, el recurso de revisión no conforma una nueva y plena instancia, ni permite reexaminar la actuación, interpretación normativa y valoración probatoria llevada a cabo por el Juzgado que dictó la sentencia impugnada, pues, como el remedio excepcional que es, únicamente permite revisar la sentencia firme en los casos tasadamente recogidos en el artículo 102.1 LJCA:

"a) Si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.

b) Si hubiere recaído en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aquélla, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase después.

c) Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.

d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta."

En segundo lugar, de soslayo desliza en su escrito el motivo previsto en el art. 102.1 a) LJCA 29/1998 para sostener que debe ser revisada y rescindida la sentencia por la aparición de la STS 339/2024, de 28 de febrero, que aporta, por ser posterior a la sentencia firme que le desestimó su pretensión de anulación y devolución de ingresos indebidos.

Esta sentencia del TS en modo alguno puede considerarse "documento nuevo o de nueva noticia" recobrado con posterioridad a la sentencia, por cuanto es una decisión judicial no un documento en sentido propio, y ni ha sido retenido ni es decisivo para el pleito. Así lo pone de manifiesto nuestro Alto Tribunal en la reciente sentencia de 23 octubre de 2024, rec revisión 6/2024, **ECLI:ES:TS:2024:5078**), **que señala (el subrayado es nuestro):**

«QUINTO.- Una sentencia posterior no se incluye en el concepto de documento decisivo posterior. Resolución del caso concreto.

Pero es que, en todo caso, no existe el presupuesto exigido por el art. 102.1.a) de la LJCA para que pueda haber lugar a la revisión que se pretende, pues el documento en el que pretende fundamentarse el recurrente para afirmar la existencia del indicado presupuesto de hecho no tiene el carácter de tal.

La aplicación al caso de autos de la doctrina jurisprudencial al que hemos hecho referencia en el fundamento segundo obliga a concluir igualmente que la demanda de revisión no puede en absoluto prosperar en la medida en que el *documento aducido por la parte actora no reúne los requisitos establecidos en el precepto legal anteriormente mencionado en los términos en que ha sido interpretado por la jurisprudencia.*

Y es que los documentos que se presentan, esto es, las SSTS de fecha 10 de julio de 2019 (rec. 4450/2017); de 14 de octubre de 2022 (rec. 6321/2020) y de 18 de julio de 2023 (rec. 6669/2021) *son decisiones judiciales.* Esto es, los documentos en los que fundamenta la parte recurrente su demanda de revisión *no constituyen documentos en sentido propio.* Tal y como se pone de relieve en las sentencias de esta Sala de 5 de diciembre de 2017 (rec 2/2017) y de 3 de noviembre de 2023 (rec. 15/2023), "no es inoportuno recordar que nuestra ley procesal menciona como documentos, susceptibles por ello de las acciones de sustracción, retención, recobro o descubrimiento, a los aptos para ser considerados así desde el punto de vista procesal, como objeto o soporte de la prueba documental, siendo así que lo que aquí se reivindica no es la aportación -o ausencia, en su día- del documento como tal, sino la atención a la doctrina o criterio judicial que en la sentencia se expresa y que, como es obvio, se plasma en documento".

Por esta razón se ha venido negando a las decisiones judiciales el concepto de documento a los efectos del art. 102.1.a) LJCA en doctrina consolidada del Tribunal Supremo. Así, en SSTS de 11 diciembre 1997 (rec. 131/1995), 11 febrero 1999 (rec. 410/1997), 18 septiembre 2000 (rec. 282/1999) o 26 mayo de 2017 (rec. 17/2016).

Además, como tales sentencias judiciales no han podido estar "retenidas" en ningún caso por fuerza mayor o por obra o acto de la parte favorecida con la resolución firme. Asimismo, tampoco, se puede compartir que pudieran resultar decisivos para la decisión final en tanto en cuanto la primera sentencia pudo haber sido incorporada al proceso al ser de fecha anterior a la sentencia revisada.

Por todo ello, procede la desestimación del presente recurso de revisión.

TERCERO. -No procede la imposición de las costas a ninguna de las partes atendida la dinámica interpretativa acontecida en relación con el referido tributo.

Por consiguiente,

FALLO

1º.- DESESTIMAMOS el recurso de revisión interpuesto por D. Miriam contra la sentencia núm.. 14/2024, de 16 de enero de 2024, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Barcelona .

2.-SIN IMPOSICIÓN DE COSTAS.

Así lo acuerdan los Ilmos. Sres. Magistrados de esta Sección.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra esta Sentencia no cabe interponer recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seuj udicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.